

Santiago, trece de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

En autos Rol C-3223-2018 seguidos ante el Tercer Juzgado de Letras de Iquique, juicio ordinario, caratulados “Díaz con Clínica Iquique”, por sentencia de primera instancia de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, se acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual y se condenó a la demandada Clínica Iquique S.A. a pagar a la demandante Mariela Marco Bustos la suma de \$4.845.300 por concepto de daño emergente y por daño moral las sumas de \$15.000.000 al actor Benjamín Oliver Díaz Marco y a su madre la demandante ya mencionada \$7.000.000, todo con reajustes e intereses corrientes desde que el fallo quede ejecutoriado.

Se alzó la demandada y una Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique, por sentencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, confirmó el fallo apelado.

Contra tal determinación la demandada dedujo recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente denuncia la infracción de los artículos 1698, 1712, 1556, 1445, 1467, 2284, 2285 y 2295 del Código Civil y 341, 346, 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil, así como el principio de enriquecimiento sin causa.

Señala que los sentenciadores han hecho una errada aplicación de la normativa en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha determinado que se resuelva contra derecho al determinar ciertos hechos como probados, en circunstancias que no hay antecedentes probatorios que lo sustenten, que se apreciará incorrectamente la cuantía de las indemnizaciones -en especial del daño emergente- y se otorgara daño moral sin respetar las normas sobre



la prueba testimonial y su valor probatorio, así como el de los instrumentos privados. En este sentido, refiere que los jueces no hacen una correcta lectura de la prueba instrumental, pues ninguno de los documentos aportados al proceso da cuenta de la patología de peritonitis que concluyen. De otro lado, dice que tampoco efectúan los descuentos correspondientes a los copagos en relación al valor de las cuentas clínicas y que se concede el total de la suma reclamada por daño emergente, sin considerar que habían algunas boletas o comprobantes de atenciones posteriores y sin relación con los hechos de autos, además, de dos “recibos de pagos”, que no se tuvieron por acompañados legalmente al proceso, pues no se cumplió por la contraria con el apercibimiento decretado por el tribunal. Lo anterior -a juicio de la recurrente- determina la existencia de un enriquecimiento sin causa para la demandante, pues se establece a su favor una indemnización por concepto de daño emergente que no corresponde a los gastos reales que en definitiva debió soportar.

Añade que también yerran los sentenciadores al imponerle la condena por daño moral respecto de ambos demandantes, al concluir que el menor ingresó de urgencia vital o emergencia, que existió una demora de al menos 6 horas en la realización del procedimiento y que existió una complicación durante la cirugía, pues los antecedentes no dan cuenta de estos hechos y sólo refieren que al paciente se le practicó una apendicectomía por apendicitis aguda y no por peritonitis. Cuestiona el valor asignado a las declaraciones de los testigos en este sentido por ser solo de oídas y no presenciales y al informe pericial, al no haber concurrido a ratificar el informe psicológico, no cumpliendo los requisitos para establecer una presunción judicial.

Solicita que se acoja el recurso y se dicte sentencia de reemplazo que rechace demanda de autos o rebaje prudencialmente los montos de indemnización por daño emergente y daño moral.

SEGUNDO: Que para una comprensión del asunto planteado, resulta útil tener presente los siguientes antecedentes:



1.- Ignacio Andrés Herrera Torres, abogado en representación de Benjamín Jorge Oliver Díaz Marco y de Mariela Roxana Marco Bustos, madre de éste, dedujo demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios en contra de Clínica Iquique S.A.

Se funda en que el día viernes 20 de octubre de 2017, Benjamín Díaz, fue llevado por sus padres aproximadamente a las 22.30, a la urgencia de la clínica demandada por presentar un dolor abdominal agudo, la que según su publicidad cuenta con una infraestructura superior y con médicos dispuestos a atender cualquier eventualidad, quienes confiaron que en ella se harían cargo de prestar los servicios médicos requeridos. Agrega que al llegar, el joven estaba muy complicado, por lo que los funcionarios lo hicieron pasar inmediatamente donde el médico de turno, quien le realizó exámenes de tacto y de movimiento de extremidades (específicamente en las piernas), pero como el dolor era agudo, solicitó exámenes más específicos, accediéndose inmediatamente a los mismos, pese a los costos, y ya con los resultados, el referido facultativo se comunicó vía telefónica con el médico cirujano de turno el doctor Lira, para informarle la probabilidad de un caso de apendicitis de urgencia necesitando su presencia inmediata para efectuar la operación. Pero, éste consultó el estado de Benjamín, señalándosele vía telefónica que presentaba un lacerante dolor y que el examen dio como resultado hemograma con leucocitosis, el cual señalaba un monto elevado de éstos, dentro de los 22.000, siendo el rango máximo 15.000, lo que a su juicio no era decisorio para diagnosticar una apendicitis que requiriese operación inmediata, debiendo realizársele otros exámenes aún más específicos para confirmarla y recién dirigirse a la clínica, a lo que los padres vuelven a acceder pese a que tenía un mayor costo, eso sí consultando la hora en que podrían hablar directamente con el cirujano, puesto que el dolor del adolescente había aumentado, señalándosele por los funcionarios que los análisis demorarían un máximo de dos horas aproximadamente, espera que fue muy larga para la delicada condición del paciente, quien a esas alturas se encontraba en posición fetal en la camilla, sin poder hablar y llorando de dolor, al pasar el tiempo requerido se



consulta por la operación pero los resultados de los exámenes no estaban listos, y como todo el equipo médico estaba preocupado por su estado la radióloga dio personalmente el aviso de cómo veía en las imágenes el apéndice con una inflamación considerable y preocupante, generándose la certeza de que el problema que tenía era una apendicitis aguda, necesitando urgente la operación que se le había comentado horas atrás. Ante esto el médico de turno llamó nuevamente al cirujano para informarle los resultados del examen que había solicitado, no obstante éste le manifiesta que ya era muy tarde, que se había acostado a dormir y que no iría a atender la urgencia, pidiéndole que se comunicara con su colega, el cirujano doctor González, para consultarle si podía concurrir, lo que fue inesperado para el equipo médico, quienes le habían señalado a la familia la disponibilidad del doctor Lira, siendo concordante con la información entregada al ingresar a la urgencia, además dicho profesional estaba al tanto de la situación, pues fue él mismo quien pidió examen “TAC”, por lo que encontrándose de turno, éste tenía la obligación de estar disponible especialmente si ya había sido avisado con antelación.

Refiere que toda la familia estuvo presente al momento de la conversación generándose un ambiente de angustia por parte de Benjamín y de sus padres, y pese a los esfuerzos del médico de turno para comunicarse con el doctor González, no tuvieron resultado, quien volvió a llamar al doctor Lira, quien ya no contestó el teléfono, por lo que aquél le indicó que era mejor que se lo llevaran de urgencia a otra institución que pudiese brindarle los cuidados que requería, ya que ellos, sin cirujano no podían hacer nada, lo que desesperó a la familia, pues la clínica se había desentendido del problema de su hijo, y ahora ellos debían preocuparse de su traslado en el delicado estado en que se encontraba, más si ya habían pasado muchas horas desde su ingreso, empeorando su estado, pudiendo llegar a una peritonitis, enfermedad con índices mortales si no es tratada a tiempo.

Expone que en el traslado del joven la demandada se limitó a practicar la comunicación telefónica con el SAMU, para solicitar una ambulancia externa, incumpliendo con ello el artículo 29 del Reglamento de Hospitales



y Clínicas, pues no coordinó su traslado en una ambulancia propia, o el ingreso del menor o el pabellón necesario para ejecutar el tratamiento certero de Apendicitis Aguda, puesto que debió generarse comunicación directa ante el traslado imprevisto y urgente de un paciente con diagnóstico certero y en estado crítico, incumpliendo el deber de cuidado, todo lo cual alteró su estado y complicó su condición, sin contar con una plan de contingencia para estos casos, siendo su deber velar por la salud de los pacientes, debiendo cuidar el actuar de sus subordinados, sin que alguien de la institución se acercara para explicar las razones de su incumplimiento.

Arguye que una vez que llegaron al hospital debieron ingresar a Benjamín desde cero, debiendo esperar para que el médico de turno efectuase su primera revisión, la que hizo sin consideración a su diagnóstico anterior, y solo recién a las 11.30 de la mañana ingresó a pabellón, concluyendo la operación a las 14:00 horas, instante en que el médico les señala que el cuadro de Benjamín se había complicado ya que se le había reventado el apéndice, transformando su estado en una peritonitis, pero que pese a ello se encontraba bien. Tras todo lo vivido, y atendido que Benjamín se encontraba en una sala común donde tenía visita solo una hora al día, sus padres deciden trasladarlo a la Clínica Tarapacá a fin de estar más cerca de él, no solo por el post- operatorio sino también debido a que el menor no se encontraba bien por todas las negligencias que sufrió por culpa de la demandada, por lo que el día 21 de octubre fue trasladado con la autorización del médico que lo había operado, quien seguiría tratándolo, afirmando que de los dos días que debía estar, el caso de Benjamín se complicó ya que su cuerpo no metabolizaba los medicamentos, además de haber adquirido una infección en la operación, debiendo ser atendido por más días, acompañándolo en todo momento, para que olvidara el terror vivido por la conducta de la demandada, dándole tratamientos de técnicas de relajación para calmarlo pues estaba muy angustiado, dándosele el alta médica al 5 día desde su ingreso.

Refiere que todo lo vivido trajo a la familia consecuencias psicológicas y físicas adversas, en respuesta a toda la situación de vulnerabilidad, tensión, inseguridad y amenaza que la demandada les hizo pasar, debiendo ellos



mismos buscar soluciones improvisadas que pusieron en riesgo su vida y salud, luego los días subsiguientes en su hogar fueron complicados, puesto que Benjamín estuvo delicado del estómago, despertando en las noches asustado y gritando, ya que no lograba olvidar el miedo e inseguridad por todas las experiencias vividas a causa de los servicios deficientes de la demandada, señalando que de niño éste tenía un carácter introvertido, y un coeficiente intelectual limítrofe, lo que con la ayuda de sus padres ha mejorado, sin embargo al ocurrir este suceso comenzó a notarse una involución, viéndose temeroso, retraído y muy dependiente de la aceptación de sus padres, quienes también comenzaron a cambiar las conductas tendiendo a ser melodramáticos, y temerosos ante cualquier foco de riesgo en que podían verse expuestos, generándose conflictos en el núcleo familiar, logrando así desestabilizar la armonía del hogar, padeciendo sentimiento de inseguridad, vulnerabilidad y temor, y pánico.

Indica que la relación entre las partes es contractual perfeccionándose por el sólo consentimiento entre la Clínica Iquique y el hijo de su representada como paciente, que al ser menor de edad dichos servicios fueron cancelados por sus padres, quienes acudieron a este centro médico.

Refiere que el que la clínica demandada no cumpliera con su obligación de tener personal médico para desarrollar una intervención quirúrgica urgente generó la situación de riesgo, derivando en el daño en la salud del adolescente y de su familia, como el hecho de que no fueron capaces de otorgar movilización propia para su traslado, éstos incumplimientos fueron el nexo causal del daño sufrido por los demandantes.

Reclama por daño emergente la suma de \$4.845.300 y por daño moral \$15.000.000 para cada uno de los demandantes, es decir, un total \$30.000.000, más intereses y reajustes, que se devenguen desde la fecha de la sentencia, hasta el día de su pago efectivo, con costas.

2.- Al contestar la demandada solicitó el rechazo de la demandada con costas. Argumenta que al joven paciente se le practicaron los exámenes y se le brindó la atención debida, diagnosticándosele “Dolor abdominal en Estudio Obs. Apendicitis Aguda”, por lo que el médico de turno procedió a



contactar al cirujano doctor Lira, quien en su calidad de cirujano concurrente podría eventualmente llevar a efecto el procedimiento quirúrgico, empero éste excusó su asistencia, no siendo posible contar en ese momento con la asistencia de otro cirujano disponible para la intervención.

No obstante lo anterior, y con el objeto de confirmar la hipótesis diagnóstica a las 02:30Hrs., y a las 3:24 hrs., se le practican primero una tomografía computada de abdomen y pelvis y luego los exámenes de grupos sanguíneos, resultados que son entregados a las 03:43 hrs., por lo que el médico de turno le sugiere a los padres del paciente que, atendida su condición, sea trasladado a las dependencias del Hospital Regional para que lleve a efecto el procedimiento quirúrgico necesario y como estos accedieron, la Clínica coordinó con el SAMU su traslado, pues de acuerdo a los protocolos dispuestos por el Servicio de Salud Regional, es éste el único medio mediante el cual deben llevarse a efecto los traslados de pacientes derivados a dichas dependencias.

Afirma que cumplió todas las obligaciones, prestando el servicio de atención de urgencia que el paciente requería, diagnosticando su patología antes de una hora y media desde su ingreso y que ante la imposibilidad de poder llevar a efecto la intervención quirúrgica requerida, su representada coordinó oportunamente su traslado.

Sostiene que los perjuicios no son de su responsabilidad y que no existe relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido, pues aun entendiéndose que existió una acción que derivó en daños éstos no le son imputables, ya que éstos provendrían de la resolución propia de un diagnóstico como el que tuvo el paciente, el cual fue manejado adecuadamente, no guardando en consecuencia relación alguna con las prestaciones otorgadas por su parte.

TERCERO: Que son hechos establecidos en el fallo impugnado los siguientes:

1.- Benjamín Jorge Oliver Díaz Marco ingresó a urgencia de la Clínica Iquique S.A. el día 20 de octubre de 2017, con un dolor punzante al costado de su estómago en su zona inguinal, siendo atendido en dicho



establecimiento por el médico de turno, quien al realizarle exámenes de tacto, se percató que podría tratarse de una apendicitis o gastroenteritis.

2.- Se le practicaron diversos exámenes, para precisar la causa de su dolencia, entre ellos uno específico para ver el estado del apéndice, ordenado por el médico cirujano de turno que no se encontraba en esos momentos, que reveló que el paciente tenía apendicitis aguda.

3.- El médico de turno de urgencia de Clínica Iquique S.A. contactó al cirujano de turno el Dr. Lira, quien se excusó de asistir, no siendo posible contar con otro disponible para la intervención quirúrgica del paciente, lo que le fue comunicado a sus padres, indicándosele por el referido facultativo que atendido el cuadro crítico de éste y la imposibilidad de operarlo en dicho centro era conveniente que lo trasladaran de urgencia a otra institución, por lo que se contrató con éstos una ambulancia externa del Samu que lo llevó de ahí al Hospital Regional Ernesto Torres Galdámez.

4.- En este establecimiento se le realizó una nueva revisión al paciente, siendo ingresado a pabellón a las 11.30 horas, saliendo de allí a las 14:00, habiéndose complicado su cuadro a peritonitis, del día 21 de octubre de 2017.

5.- El 21 de octubre del mismo año el paciente es trasladado desde el Hospital Regional a la Clínica Tarapacá, para pasar el post operatorio.

6.- Entre la actora, representante legal del paciente menor de edad y la Clínica Iquique existió un contrato de asistencia sanitaria, normal, por el cual la clínica demandada se obligó a entregar servicios de atención médica íntegra y completa, teniendo como deber principal el cuidado de la salud del paciente, quien a su vez se obligó a pagar por los servicios recibidos, lo que fue cumplido por éste

7.- Entre la institución de salud y los médicos que realizaron las atenciones de 20 y 21 de octubre de 2017 -Dr. José Lineros González (urgencia) y Dr. Lira (concurrente, de turno)- existe una relación de dependencia laboral, ya que éstos prestan sus servicios al público en la urgencia de la clínica demandada, lo que además no fue controvertido por ésta en su contestación.



CUARTO: Que sobre la base de los presupuestos fácticos antes anotados los sentenciadores concluyen que en la atención prestada al paciente en la Clínica Iquique S.A. existieron omisiones que constituyeron un actuar negligente ante el cuadro de apendicitis que le fuera diagnosticado por el mismo centro de salud, y que hacía imprescindible tomar medidas inmediatas como hospitalizarlo a fin de garantizar su seguridad y evitar que su cuadro empeorara y pasara a una peritonitis, debiendo haberlo intervenido quirúrgicamente a la brevedad posible, lo que no ocurrió, pues tuvo que ser derivado al Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdámez, donde por la demora su cuadro se complicó, pues al ser operado, cerca de las 11:30 horas del día 21 de octubre de 2017, la apendicitis se había transformado en una peritonitis, lo que hace al procedimiento quirúrgico más complejo y riesgoso, así como la recuperación del paciente.

Añade el fallo impugnado que la *lex artis ad hoc* exigía al médico Sr. Lira quien fue llamado en horas de la madrugada por su colega de turno, asistir ante el llamado, por tratarse de un médico concurrente, que eventualmente podría llevar a efecto el procedimiento quirúrgico que requiriese el cuadro de apendicitis aguda cursada por el paciente, inasistencia que no tuvo ninguna justificación razonable, debiendo haberse tomado por la Clínica Iquique S.A. medidas idóneas, atendida la naturaleza del cuadro clínico del paciente que podía evolucionar muy probablemente a una peritonitis de no ser operado a la brevedad, como el contar con algún otro médico que pudiese llevar a efecto la intervención, y no su derivación tardía hacia a otro centro asistencial, ello para garantizar su seguridad y prevenir que surgieran peligros para su salud, los que en definitiva se produjeron.

Afirma la sentencia que el incumplimiento de la obligación de prestación de salud íntegra y oportuna fue negligente, debiéndose tener por acreditado el presupuesto de la responsabilidad contractual del daño o perjuicio, constituido por el hecho del deterioro mayor de la salud del paciente, que pasó de una apendicitis a peritonitis, con todo lo que ello conlleva para el mismo y su familia, al tenor de las declaraciones de los



testigos y de los documentos que dan cuenta de la intervención por peritonitis por parte del hospital regional (ficha paciente Hospital Regional y registro de urgencia y exámenes Clínica Tarapacá), por lo que será rechazada la alegación de la demandada respecto a que habría cumplido sus obligaciones respecto de la actora.

Se adiciona por los sentenciadores que la relación de causalidad entre el incumplimiento contractual y el daño causado, se satisface con el mérito de los documentos consistentes en acta de ingreso a la urgencia de la Clínica Iquique, de los exámenes, fichas y comunicaciones, de los cuales se colige que el hecho por el cual se responde y que es causa necesaria del perjuicio, está dado porque los médicos que trabajaban para la demandada y que estaban el día de los hechos de turno en la misma, no hubieran intervenido al paciente de apendicitis, que el mismo centro médico diagnosticó y que ante la falta de especialista no informó oportunamente, para disponer su derivación inmediata a un centro hospitalario que contara con los profesionales idóneos para efectuar la apendicitis requerida en el caso, y no sucediera como aconteció que el cuadro clínico pasara a peritonitis, lo que indudablemente provocó mayores inconvenientes y complejidades, y significó además un real peligro vital para el paciente, lo que no hubiera sucedido de haber puesto todos los medios materiales y humanos que estaban a su alcance.

Concluyen los sentenciadores que la Clínica incurrió en un incumplimiento del contrato de salud por no haber intervenido quirúrgicamente a la brevedad al paciente que ingresó de emergencia, con una apendicitis diagnosticada por ellos mismos, y constando por el testimonio de la propia demandada que se intentó contactar a un médico de turno, cuyo deber es acudir a los llamados que precisamente se le hace por una emergencia médica. Y que, además, también la demandada obró negligentemente, pues en último caso si no pudieron hacer concurrir al médico de emergencia que estaba de turno debieron haber informado de ello a los padres del menor para disponer el traslado de su hijo, inmediatamente a otro centro médico, y no haberle practicado más exámenes que retrasaron aquello, por lo que la falta de atención quirúrgica



y la tardía derivación practicada a la víctima es la causa que es estimada como equivalente en la producción del daño, ya que es condición necesaria del resultado dañoso.

Explican los jueces que el menor no recibió los cuidados médicos correspondientes y oportunos por parte del Centro Hospitalario demandado, al haber admitido su ingreso en urgencia, los que requerían de una intervención de emergencia y de su hospitalización inmediata para evitar mayores complicaciones, medidas de protección que habrían evitado que el cuadro clínico del paciente pasara de apendicitis a peritonitis, como ocurrió, lo que constituye un actuar contrario a la *lex artis* del caso en concreto.

Hacen hincapié en que el riesgo vital con el que ingresó al Hospital Regional de Iquique, hizo necesaria una operación de emergencia en que el equipo médico dio cuenta del agravamiento de su condición a peritonitis, intervención quirúrgica más delicada y prolongada y que presenta mayores riesgos y complicaciones que una apendicitis, y un posterior reposo absoluto en el post operatorio que se llevó a cabo en la Clínica Tarapacá.

Concurriendo los requisitos de la responsabilidad contractual reclamada se concluye que procede acoger la demanda de indemnización de perjuicios y se condena a la demandada a pagar la suma de \$4.845.300 por concepto de daño emergente, por los diversos emolumentos en que incurrió la actora, en el curso de la atención médica de Benjamín Díaz, de conformidad a los documentos acompañados y \$15.000.000 y \$7.000.0000 por daño moral el joven y para la madre, respectivamente.

QUINTO: Que, como puede apreciarse, el recurso en estudio sustenta las infracciones a las normas sustantivas que denuncia sobre la base de una apreciación de la prueba diversa a la efectuada por los jueces del fondo, cuestionando con ello las conclusiones a las que arriban en cuanto a que se configurarían los presupuestos de la acción deducida y las condiciones para regular los montos por concepto de daño emergente y moral en que lo hacen.

SEXTO: Que al respecto, cabe señalar, que la actividad relativa a la ponderación de la prueba rendida en el juicio es una facultad privativa de



los jueces del fondo, que escapa al recurso que por esta vía se ha interpuesto, de no mediar infracción a las normas reguladoras de la prueba.

Dichas normas se entienden vulneradas cuando los sentenciadores invierten el onus probandi; rechazan las pruebas que la ley admite; aceptan las que la ley rechaza; desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio, o alteran el orden de precedencia que la ley les diere. Constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son soberanos para apreciar las pruebas, dentro del marco regulado por las normas pertinentes.

SÉPTIMO: Que en este sentido la recurrente denuncia error en la valoración de la prueba documental y testimonial atribuyéndole a los sentenciadores falta en este proceso al no respetar el valor probatorio de estos medios y su mérito estableciendo conclusiones que no condicen con este.

OCTAVO: Que en el caso sub lite no se ha alterado o invertido la carga de la prueba, ni se ha desconocido el valor que la ley asigna a la prueba indicada, cuestión distinta es que los sentenciadores la han ponderado, estableciendo conforme a su mérito las conclusiones pertinentes de las cuales discrepa la recurrente.

En efecto, la prueba ha sido analizada por los sentenciadores, consignándose en el fallo las apreciaciones sobre los instrumentos acompañados por las partes al juicio, en cuya virtud le asignan valor, ajustándose a las atribuciones privativas, tanto en la comparación de las pruebas rendidas en el proceso como en el análisis que efectúan de ella misma, a fin de establecer cada uno de los elementos que consagra el legislador para regular su fuerza probatoria, lo que no puede ser revisado por la vía de este recurso de derecho estricto. Por lo demás, la demandada no impugnó en la oportunidad procesal correspondiente la prueba documental que en esta sede pretende controvertir. De este modo, cabe descartar la vulneración a los artículos 341y 346 del Código de Procedimiento Civil.



Tampoco es procedente el denuncia de infracción a los artículos 383 y 384 del mismo texto legal, toda vez que la apreciación de la prueba testimonial entendida como el análisis que efectúan de ella los sentenciadores de la instancia, queda entregada a dichos magistrados y escapa al control del tribunal de casación.

NOVENO: Que, en estas condiciones, no es posible alterar la situación fáctica que viene determinada en el fallo cuestionado, ni corresponde establecer otros hechos distintos a los que ha sido asentados para el éxito de la pretensión de ineficacia, por cuanto, de la manera en que se formuló el recurso, los antecedentes que sirvieron de base a las conclusiones de los sentenciadores resultan inamovibles y definitivos para este tribunal de casación.

En efecto, todo recurso de casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, que no constituye instancia jurisdiccional, pues no tiene por finalidad propia revisar las cuestiones de hecho del pleito. Antes que ello, se trata de un recurso de derecho, estricto, ya que su resolución debe limitarse en forma exclusiva a examinar la correcta o incorrecta aplicación de la ley en la sentencia que se trata de invalidar, respetando los hechos que establece. En ese sentido, por disposición de la ley, el examen y consideración de tales hechos no son de incumbencia del conocimiento del tribunal de casación.

DECIMO: Que esta limitación a la actividad judicial de este tribunal se funda, como se sabe, en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, al disponer que la Corte Suprema al invalidar una sentencia por casación en el fondo dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que zanje el asunto que haya sido objeto del recurso de la manera que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos, tal como se han establecido en el fallo recurrido. Solo en forma excepcional es posible la alteración de los hechos asentados por los tribunales de la instancia, en el caso que la infracción de ley responda a la transgresión de una o más normas reguladoras de la prueba, mas no respecto de la apreciación de las probanzas que se hubiesen rendido, que es facultad privativa del juzgador.



UNDÉCIMO: Que en este orden de ideas, cabe consignar que la recurrente no ha denunciado una efectiva vulneración de las normas reguladoras de la prueba sobre los aspectos antes mencionados, que autorice una eventual revisión de los presupuestos fácticos contenidos en el fallo impugnado o el establecimiento de otros que hubieren sido preteridos de su valor probatorio.

DUODÉCIMO: Que, conforme a lo razonado, el recurso de nulidad no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 765, 766 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se **rechaza el** recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Marco Antonio Iglesias Muñoz por la parte demandada, en contra de la sentencia de dieciséis de enero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Mauricio Silva Cancino.

Rol N°24.359-2020.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sr. Mauricio Silva C., Sr. Roberto Contreras O., Sra. Dobra Lusic N. y Abogado Integrante Sr. Diego Munita L.

No firman los Ministros (s) Sr. Contreras y Sra. Lusic, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber terminado ambos su periodo de suplencia.





null

En Santiago, a trece de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

